

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos Rol N° **57.942** del ex Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, por sentencia de primer grado dictada el día ocho de agosto de dos mil dieciséis, escrita de fojas 2104, se condenó a los acusados:

a) Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra, como autor directo del delito de homicidio calificado de Hugo del Rosario Candía Núñez, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano, a la pena de **diez años y un día, de presidio mayor en su grado medio**, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y a las costas de la causa.

Y, como autor directo del delito aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N° 1 inciso primero, del Código Penal, en perjuicio de Máximo Segundo Neira Salas, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano, a la pena de **sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo**, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y las costas de la causa.

b) Ary Antonio Acuña Figueroa, como encubridor del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, de Hugo del Rosario Candía Núñez, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano, a la pena de **cuatro años de presidio menor en su grado máximo**, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la



de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y a las costas de la causa.

Y, como autor directo del delito aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N° 1 inciso primero, del Código Penal, en perjuicio de Máximo Segundo Neira Salas, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano, a la pena de **sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo**, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y las costas de la causa.

Impugnada esta decisión por la vía de los recursos de casación en la forma y apelación, la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 2417, desestimó el arbitrio de casación formal deducido por la defensa de Julio Alarcón Saavedra y las apelaciones, confirmando la indicada sentencia.

En contra de ese fallo la defensa del condenado Julio Alarcón Saavedra dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, mientras que, las partes querellantes correspondiente a la familia Neira Oportus y el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de derechos Humanos del Ministerio de Justicia, dedujeron sendos arbitrios de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, para mayor claridad de lo que debe resolverse, es conveniente recordar que el tribunal del fondo tuvo por acreditado que:

“a) Que, alrededor de las 08:00 horas del 11 de septiembre de 1973, personal de Infantería de Marina de la Armada de Chile, entre los cuales se



encontraba el Teniente Julio Alarcón Saavedra (según los dichos de Juan de Dios Arriagada Delgado de fs. 232), allanaron las dependencias de la Compañía de Aceros del Pacífico con el objeto de detener a determinadas personas que eran sindicadas como contrarias al emergente Gobierno Militar. Entre ellas, se encontraban dos dirigentes del Sindicato de Sigdo Kopper S.A, que laboraban en el interior del recinto de la CAP, **Hugo Candia Núñez** y **Máximo Neira Salas**. Este –Neira- es detenido en el lugar y llevado a la Base Naval de Talcahuano, asignándole el n° 993, donde es visto por su hermano Juan Luis Neira Salas (fs. 216), mientras que Candia huye hasta a su casa y se mantiene oculto en sus inmediaciones, teniendo contacto con su familia por un espacio de 5 días, pero atendida las informaciones que le suministró su hermano Hans -que continuó trabajando en Sidgo Koopers-, en el sentido que diariamente las patrullas navales iban a la empresa y la allanaban en su busca, amenazando con detener a su familia si no aparecía, decide entregarse en la Base Naval, donde fue visto nuevamente junto a Máximo Neira, en el gimnasio del mismo recinto, lugar desde el cual la unidad de inteligencia de la Armada de Chile, denominada Ancla dos, -cuyo jefe en esa época y hasta finales del año 1973 era Ary Acuña Figueroa-, destinaban a los detenidos a sus lugares de reclusión.

b) Que los referidos Candia y Neira fueron calificados como peligrosos, siendo derivados al sector denominado la “Ciudadela”, ubicada al interior delFuerte Borgoño y custodiado por integrantes del Destacamento de Infantería de Marina “Aldea, por orden y a disposición del Departamento de Inteligencia de Armada, denominada Ancla 2, donde fueron sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos y psicológicos aplicables a los prisioneros en tiempo de guerra.



Estos consistían, entre otros: el “submarino”, donde los colgaban de los pies y la cabeza hacia abajo, la que sumergían en un tambor con agua por lapsos de hasta 30 segundos y luego los volvían a interrogar; aplicación de corriente eléctrica con terminales en los genitales y lengua; interrogatorios desnudos en horas de la madrugada y con una potente luz alumbrando los ojos; y, comúnmente, les propinaban golpes de pie y puño en diferentes partes del cuerpo. A cargo de los interrogatorios en la “ciudadela” estaban, entre otros, el teniente Julio Alarcón Saavedra, el cual ordenaba los apremios para que también los cumplieran los suboficiales bajo su mando. En algunas ocasiones practicó y presenció estos interrogatorios con torturas el Jefe de Ancla dos, Ary Acuña Figueroa.

*c) Que en este sector del fuerte Borgoño Candía Núñez fue visto por dos personas: el infante de marina **Néstor Osvaldo Ramírez Robles** (fs. 248), quien custodiaba a los detenidos, viéndolo muy maltratado y en dos oportunidades le llevó a la familia de éste, una carta de éste y dos pañuelos con sangre, dándole noticias del mismo; y también a Neira, quien incluso tenía una pierna en descomposición producto de las balas; y **Eduardo del Carmen Belmar Melo** (fs. 312), conscripto de la Armada y que custodió a detenidos, teniendo una conversación con Candía que estaba en un calabozo y que lo conocía desde antes.*

*También fueron testigos de la permanencia de Neira y Candía en la Base Naval, **Nelson Díaz Sánchez** (fs. 698 vta), quien era colega de trabajo en la empresa Sigdo Kopper S.A, quien los vio dentro de la Base Naval muy maltratado, sin estabilidad, ya que ni siquiera podían estar sentados ya que se desplomaban así como **Hugo Humberto Matamala Muñoz y Juan Luis Neira Salas** (fs. 271 y*



269, respectivamente, de la causa 2182-98 Episodio Máximo Neira) , los cuales son contestes en indicar, que días próximos al 11 de octubre de 1973, se +encontraban muy heridos y golpeados.-

d) El 11 de octubre de 1973, en horas de la tarde, el Teniente de la Armada de Chile **Julio Alarcón Saavedra** ordena al soldado conscripto **Patricio Salamanca Marín** tomar su fusil y que lo acompañe al sector de la Ciudadela a cumplir una misión. Al llegar, ordena a Salamanca sacar a un detenido que estaba en una de las casetas de la ciudadela, (de acuerdo a los antecedentes del proceso, **Hugo Candía Núñez**, de acuerdo al informe de autopsia de fs. 633 y recreación de los hechos cuya acta rola a fs. 1.034 y fecha de su muerte, 11 de octubre de 1973) y caminan con él por la cancha de tiro y de improviso, sin provocación alguna, Alarcón sacó su pistola Colt 45, que portaba y le disparó en el lado izquierdo de la cabeza del detenido, provocándole la muerte en forma instantánea por estallido facial bóveda craneana izquierda, herida a bala transfixiante submentona y supraglótica. Acto seguido, y aún con la pistola en la mano, se dirige hacia el soldado Salamanca, a quien le advierte que ante cualquier pregunta, debe declarar que el detenido intentó arrebatarse su arma –a Salamanca- y que él –Alarcón-, se vio en la obligación de disparar al detenido.

e) Que el mismo día, en lugar y circunstancias distintas, pero dentro del sector de la “ciudadela”, fallece **Máximo Neira Salas** a raíz de un estallido parcial de la bóveda craneal derecha, por herida de bala parieto occipital derecha, el cual se encontraba detenido desde el allanamiento en la empresa Sidgo Koopers, efectuada, entre otros, por el Teniente Julio Alarcón Saavedra, quien lo



interrogaba bajo tortura, por instrucciones de don Ary Acuña Figueroa, Jefe de Ancla Dos, bajo cuya responsabilidad se encontraba el detenido.

f) Posteriormente, los restos mortales fueron entregados a sus familiares, en urnas selladas por autoridades de Armada, dando como información, en un comunicado de prensa (fs. 172), que los detenidos Candía y Neira habían intentado una fuga mientras eran subidos a una camioneta en el Fuerte Borgoño para ser llevados a interrogatorio y que personal naval que lo custodiaba habían hecho uso de sus armas de fuego, dándoles muerte, versión que era falsa, atendido los hechos acreditados en esta causa y que se han expuesto precedentemente”.

Tales hechos consignados en las letras a), b), c) y d) de la sentencia impugnada permitieron tener por acreditado **el delito de homicidio calificado** en la persona de **Hugo Candía Nuñez**, tipificado y sancionado en el artículo 391 n° 1 circunstancia primera del Código Penal, por cuanto, el agente actuó con alevosía, al obrar sobre seguro, disparando un tiro en la cabeza a don Hugo Candía Nuñez, mientras éste se encontraba en un estado de absoluta indefensión y sin existir riesgo alguno para el hechor.

Asimismo y respecto del hecho señalado en las letras a), b), c) y e), se tuvo por acreditado **el delito de aplicación de tormentos cometidos por funcionarios públicos en la persona de Máximo Neira Salas**, sancionado en el artículo 150 n° 1, inciso primero del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, al encontrarse establecido que la víctima fue sometida a tormentos y se usó con ella un rigor innecesario.

I- Respecto del recurso de casación en la forma:



SEGUNDO: Que, la defensa del acusado **Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra**, funda su arbitrio de casación formal en la causal 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, por la inobservancia de lo prescrito en los N°s 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal, toda vez que, en su opinión, la sentencia impugnada no hace mención a las defensas opuestas en la acusación fiscal y no contiene las consideraciones en cuya virtud se dieron por probados los hechos atribuidos a su representado.

Finaliza solicitando que se invalide el fallo recurrido y que se dicte una nueva sentencia en la que se absuelva a Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra, con costas de la causa.

TERCERO: Que, la causal de casación contemplada en el artículo 541, N° 9 del Código adjetivo que se esgrime en consonancia con los numerales cuarto y quinto del artículo 500 de ese mismo cuerpo legal, solo concurre si el fallo carece por completo de lucubraciones o razonamientos relativos a los puntos de que se trate. Y, si tales reflexiones existen, la falta de motivación no se presenta aunque se estime que son equivocadas, erróneas, exiguas o insuficientes.

Por esto, el motivo de invalidación que se alega tiene un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse sobre su procedencia basta un examen del fallo a fin de constatar si existen los requerimientos que impone la ley, sin que corresponda valorar el contenido de sus fundamentos, pues el motivo de casación formal no abarca el mérito de aquellos sino únicamente la verificación de la exigencia legal de fundamentación, quedando para la nulidad sustantiva las alegaciones vinculadas a la aplicación de las normas a consecuencia de lo que se hubiere razonado.



CUARTO: Que, del análisis de la sentencia impugnada fluye que dichas obligaciones se cumplen a cabalidad, por cuanto el fallo no sólo hace suyos los raciocinios del pronunciamiento apelado que contienen las consideraciones en virtud de las cuales se dieron por probados los hechos que se atribuyeron al procesado y que emanaron no solo del testimonio de Patricio Salamanca Marín, todo lo cual apareció como verosímil y fue analizado en los numerales 11 al 15 de la sentencia impugnada.

Por tanto, si esos fundamentos del fallo son erróneos, superficiales o insuficientes, ello debe discutirse por la vía del recurso de casación en el fondo sin acudir al de forma, de manera que la alegación promovida por la defensa del sentenciado Alarcón Saavedra, no puede prosperar.

II- En lo tocante a los Recursos de casación en el fondo:

QUINTO: Que la defensa del encartado **Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra**, dedujo recurso de nulidad sustancial fundado en la causal contenida en el numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 193, 459, 456 bis y 547 del mismo cuerpo de normas, toda vez que, el sentenciador no realizó un análisis global de toda la prueba rendida, construyendo una relación fáctica violando las leyes reguladoras de la prueba, dando por acreditados hechos, sin existir elementos probatorios para ello y para acreditar su participación en los delito de homicidio calificado y de aplicación de tormentos.

Finaliza solicitando que se declare que la sentencia es nula y se absuelva a su representado.



SEXTO: Que, cabe advertir que el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, no es una genuina ley reguladora de la prueba, ya que otorga una mera facultad al juez, no revisable por vía de casación, criterio ratificado por numerosa jurisprudencia (*Entre otras SCS, 04-10-2019, Rol N° 3.322-18 que resolvió: “En efecto, a propósito de la prueba testimonial, es indiscutible que el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal no reviste la calidad requerida para sustentar el motivo de nulidad en examen, toda vez que sólo faculta al tribunal para otorgar a la declaración de testigos el valor de demostración suficiente del hecho sobre el cual atestiguan, es decir, no constituye un imperativo para el proceder de los jueces del grado sino que sólo tiene por objeto indicar al tribunal un criterio determinado para ponderar los dichos aportados por los deponentes y en cuya valoración los jueces obran con facultades privativas. En tal virtud, corresponde a los magistrados del fondo apreciar soberanamente los asertos de los testigos y hacer un examen estimativo y comparativo de ellos, estando autorizados discrecionalmente para considerar o no como suficiente prueba de un hecho los atestados que reúnan las calidades intrínsecas que determina el mencionado artículo”.*

En el mismo sentido, el artículo 193 del Código de Enjuiciamiento Criminal tampoco tiene el carácter de ley reguladora de la prueba, toda vez que se refiere a la labor del juez de hacer concurrir a su presencia y examinar a los testigos indicados en la denuncia, querella o auto cabeza de proceso, o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias y a todos los demás que supieren hechos o circunstancias, o poseyendo datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente.



Además y en concreto, el recurso, discurre sobre la valoración ilegítima que, en su entender, dieron los sentenciadores a la prueba. Con ello, el reclamo no ataca que la sentencia haya errado en torno a la carga de la prueba, ni que haya rechazado un medio probatorio que la ley autoriza o haya admitido uno que la ley repudia, por lo que en ese entendido, las otras normas invocadas, en su aspecto valorativo, no son reguladoras de la prueba.

SEPTIMO: Que, además, es importante indicar que al final del acápite de este recurso se denuncia la aplicación errónea del derecho de otras normas procesales, que no dicen relación con la causal invocada, para dejar patente que se impuso una pena más grave al no estimar concurrente la atenuante calificada, prevista en el artículo 103 del Código Penal, lo que también influiría en lo dispositivo del fallo.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que existe una incompatibilidad entre los reclamos denunciados, esto es, por una parte se solicita la absolución del acusado y por otra se reclama sobre la pena impuesta, esta Sala Penal ha utilizado dos argumentos para desestimar lo pedido en cuanto a la aplicación del artículo 103 del Código Penal, por cuanto la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no



proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Y con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, lo cierto es que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurren varias atenuantes, por lo que el vicio denunciado carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado (Entre otras, SCS Rol 35.788-2017, de 20 de marzo de 2018; 39.732-2017, de 14 de mayo de 2018; 36.731-2017, de 25 de septiembre de 2018; 2.661-2018, de 23 de diciembre de 2019 y, 20.616-2018, de 14 de enero de 2021).

NOVENO: Que de esa manera, lo que se ha venido explicando en este apartado, conduce a desestimar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa del condenado Alarcón Saavedra.

DECIMO: Que, los querellantes Máximo Rodrigo Neira Oportus, Ana María Neira Oportus, Claudia Angélica Neira Oportus, y Silvia Miriam Oportus Roca, deducen recurso de casación en el Fondo por las causales previstas en el artículo 546 N°s 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, denunciándose la aplicación errónea de los artículos 17 N° 2 y 52 inciso primero, del Código Penal y lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, debiendo aplicarse los artículos 15 N° 2 y 50, ambos del Código Penal, en relación a lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.



Asimismo, reclaman que el artículo 150 N°1, inciso primero, del Código Penal, no debió aplicarse; siendo el correcto el artículo 141 inciso tercero del Código Penal.

Arguye en relación al artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, que se condenó a Ary Acuña Figueroa en calidad de encubridor del delito consumado de homicidio calificado cometido en perjuicio de Hugo Candía Núñez, debiendo hacerlo en calidad de autor; por cuanto se encuentra acreditado que Acuña Figueroa era el jefe, al momento de los hechos investigados, del Departamento de Inteligencia “Ancla Dos” y era quien decidía el destino de los detenidos; además interrogó y torturó a Candía Núñez, junto a subalternos. Por lo que tenía pleno conocimiento y control de lo que ocurría con los detenidos en la Base Naval de Talcahuano al trabajar como superior y de forma conjunta con el Teniente Alarcón Saavedra, siendo la conclusión correcta, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 2 del Código Penal en relación al 488 del Código de Procedimiento Penal, es que Ary Acuña Figueroa, participó en calidad de autor mediano por dominio del aparato organizado de poder.

Asimismo, y en cuanto a la vulneración al numeral 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que se calificó erróneamente el delito cometido en perjuicio de Máximo Neira Salas, esto es, aplicación de tormentos o rigor innecesario, previsto en el artículo 150, N° 1, inciso primero, del Código Penal, debiendo haberse calificado como constitutivo del delito de secuestro calificado o con grave daño, previsto en el artículo 141 inciso tercero del mismo Código.

Solicita que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo condenando a los acusados: Julio Alarcón Saavedra como autor del delito



consumado de secuestro calificado de Máximo Neira Salas a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio y a Ary Acuña Figueroa en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio calificado de Hugo Candía Núñez y de secuestro calificado de Máximo Neira Salas, a las penas de veinte años de presidio mayor en su grado máximo y quince años de presidio mayor en su grado medio, respectivamente.

UNDECIMO: Que el Programa de Derechos Humanos, interpone recurso de casación en el fondo por las causales previstas en el Artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los Artículos 16 y 15 N° 3 del Código Penal, arguyendo que el acusado Acuña Figueroa es cómplice y no encubridor del delito de Homicidio Calificado en la persona de Hugo Candía Núñez, revelando que sin cuestionar los hechos acreditados en estos autos ni los elementos que sirvieron para presumir la participación del encausado no se ponderó los elementos configurativos de la hipótesis prevista en el artículo 16 del Código Penal, por cuanto las circunstancias anteriores al homicidio calificado de Hugo Candía Núñez, que están reconocidas en los hechos acreditados y en los elementos de cargo contenidos en el considerando 10° de la sentencia de primer grado, consistieron en la singularización de la víctima, su segregación, su interrogatorio mediante tortura y que *“en algunas ocasiones practicó y presenció estos interrogatorios con torturas el Jefe del Ancla dos, Ary Acuña Figueroa”*; con el fin de infundirle terror sin que existiera proceso legal en su contra.

Arguye que, la aportación causal a la producción del hecho del autor principal, está configurada por una serie de actos anteriores: Los que fueron



explicados precedentemente, y se encuadran dentro del concepto previsto en el artículo 16 del Código Penal.

En cuanto a la causal prevista en el numeral 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, sostiene que se hizo una calificación equivocada del delito, toda vez que era procedente aplicar la figura prevista en el artículo 150 N° 1 inciso 2° del Código Penal, esto es, torturas o rigor innecesario en contra de la víctima Neira Salas, sí causaron como resultado la muerte o, a lo menos, lesiones. Mostrando que en el considerando 11° de la sentencia de primer grado se indica que “[...] sólo se logró acreditar las torturas en la persona de Neira Salas... pero no se adquirió convicción respecto a la forma en que ocurrió su muerte”, razonamientos que sólo involucran la circunstancia de muerte mas no la de lesiones, desconociendo que dentro de los propios elementos de convicción existe un Informe Pericial, a fojas 962, que expone la existencia, en los restos exhumados, de material metálico exógeno (alambre) que demuestra inmovilización y se conecta, sin dudas, con el estado físico de deterioro de ambas víctimas, producto de las salvajes torturas previo al 11 de octubre de 1973; tal como se reconoce en los hechos acreditados en autos.

Por lo que solicita se dicte sentencia de reemplazo que condene al encausado Ary Antonio Acuña Figueroa, en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado en perjuicio de Hugo del Rosario Candía Núñez, a la pena de presidio mayor en su grado mínimo, en un quantum que reconozca la extensión del mal causado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal y se dicte sentencia de reemplazo que condene a los acusados Ary Antonio Acuña Figueroa y Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra, en calidad de autores del



delito de aplicación de tormentos con resultado de lesiones o muerte en la persona de Máximo Segundo Neira Salas, a la pena de presidio menor en su grado máximo, en un quantum que reconozca la extensión del mal causado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal.

DUODÉCIMO: Que, conforme a los hechos consignados en el considerando Quinto del fallo y que están reproducidos en la presente sentencia, es preciso señalar que el veredicto en revisión no analizó en detalle los hechos imputados al acusado Ary Acuña Figueroa, conforme a los cuales aparece que las labores que desarrolló corresponden a un conjunto de actos que significaron la privación de libertad bajo circunstancias de malos tratos a la víctima, lo que permite considerar que se encuentra establecida su responsabilidad en calidad de autor mediato, toda vez que tuvo incidencia en la selección de las víctimas y circunstancias de su cautiverio, como “*Jefe de Anclados*”, por lo que la adecuada categorización respecto al delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de don Hugo Candía Nuñez, es la prevista en el artículo 15 N° 2 del Código Penal y no la consignada en la sentencia o la solicitada por el Programa de Derechos Humanos, por haber forzado o inducido a otros a ejecutarlo y debe ajustarse a dicha calidad el reproche y la pena correspondiente al ilícito acreditado.

DECIMO TERCERO: Que, en cuanto a la segunda infracción denunciada, en relación a la calificación del delito de aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, es un hecho asentado en la causa que **Máximo Neira Salas**, falleció el día 13 de octubre de 1973, dentro del sector de la “ciudadela”, a raíz de un estallido parcial de la bóveda craneal derecha, por herida de bala parieto occipital derecha, cuando se



encontraba detenido desde el allanamiento en la empresa Sidgo Koopers, perpetrado el día 11 de septiembre de 1973, por el Teniente Julio Alarcón Saavedra, quien lo interrogaba bajo tortura, por instrucciones de Ary Acuña Figueroa, Jefe de Ancla Dos, bajo cuya responsabilidad se encontraba el detenido y que sus restos mortales fueron entregado a sus familiares, en urna sellada por autoridades de Armada, dando como información, en un comunicado de prensa, que el detenido junto a otro, habían intentado fugarse mientras eran subido a una camioneta en el Fuerte Borgoño para ser llevados a interrogatorio, por lo que el personal naval que lo custodiaba habían hecho uso de sus armas de fuego, dándoles muerte, versión falsa, conforme a los hechos acreditados en la causa.

DECIMO CUARTO: Que el fallo censurado, luego de ponderar los elementos de juicio que se reunieron en autos en torno a la aplicación de tormentos y muerte de Máximo Segundo Neira Salas, concluyó que los hechores actuaron deliberadamente e inhumanamente al infringir dolor mediante la tortura, lo que lo demuestran sus restos mortales al haber sufrido amarras con alambres en su cuerpo, las que necesariamente produjeron heridas producidas por la despiadada acción de los victimarios, la que coincide con las versiones dadas por los testigos acerca del grave maltrato sufrido por la aplicación de los tormentos.

DECIMO QUINTO: Que, de consecuencia, constatado por los jueces de fondo también en el motivo 10. del fallo de segunda instancia que *“las víctimas fueron sometidas a tormentos y que perdieron la vida mientras se encontraban custodiados por personal de la armada”*, los que provienen del actuar doloso convergente en la acción de los acusados, importa la imputación de este resultado de lesiones más dañoso, según se ha razonado en esta sentencia al acoger por



este aspecto el recurso de casación en el fondo de la querellante Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y se debe proceder en seguida a la calificación correspondiente dentro de los tipos penales a aplicar, es decir, determinadamente, que se perpetró el delito de aplicación de tormentos causando lesiones a la víctima en grado de consumado, que precisa y sancionaba a la época de ocurrencia de los hechos el inciso segundo, del número 1 del artículo 150 del Código Penal, con las penas de presidio o reclusión menores en sus grados máximos, y no la comisión de la figura penal de secuestro agravado con resultado grave daño, del artículo 141, del Código Penal, que contribuiría a aumentar la penalidad del secuestro, para los hechos que lo hayan previsto o a lo menos, les haya sido previsible el resultado, para lo que requiere, en sede de nulidad de fondo, que se hayan previamente establecido los hechos inamovibles ajenos al campo normativo sobre quebrantamiento de la norma, por lo que, consecuentemente, esta Corte de Casación debe desechar la causal de nulidad del número 2, del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, invocada por la familia de don Máximo Neira Oportus.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 541, 544, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara que **SE RECHAZAN** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por las defensa del sentenciado Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra y el de fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos en lo referido a la participación como cómplice y el de la familia Neira en lo relativo a la calificación del delito como secuestro calificado respecto de la Víctima don Máximo Neira Sala y, **SE ACOGE**



el recurso de casación en el fondo deducido por la Familia Neira Oportus en cuanto a la participación imputada al condenado Ary Acuña Figueroa en el delito de Homicidio calificado, siendo la de autor y el deducido por la Unidad Programa de Derechos Humanos en cuanto a la recalificación de los hechos respecto a la víctima Máximo Neira Salas a la prevista en el artículo 150 N° 1 inciso 2° del Código Penal, en contra de la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 2417 y siguientes, la que, en consecuencia, se anulará en aquella parte, y se la reemplazará por la que se dicta a continuación, en forma separada, sin previa vista.

Regístrese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Zepeda.

Rol N° 28.310-2018

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro Suplente Sr. Zepeda, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:00

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:01



LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:01

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 21/09/2021 14:24:48



En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de segundo grado, con excepción de sus motivos 9, 16 y 18 que se eliminan. Asimismo, en el numeral 10, se sustituyen las palabras “aprendidas” por “aprehendidas” y “aprensores” por “aprehensores” y de la decisión de casación que antecede, se dan por reiteradas las reflexiones contenidas en sus motivos duodécimo a décimo quinto.

Se reproduce la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciséis, escrita a fojas 2417 y siguientes, sustituyendo en su considerando sexto, párrafo tercero, el inciso “primero” por “segundo”, y en el considerando décimo la voz “encubridor” por “autor”, el artículo “17” por “15”, eliminándose, asimismo, en los motivos décimo y undécimo sus párrafos último y penúltimo y, se suprime el considerando vigésimo Segundo y del vigésimo tercero se eliminan su párrafo segundo y en el tercero, las expresiones que van desde “; hasta o rigor innecesario,” y después de la palabra calificado se agrega un punto final.

Y se tiene, además, presente:

1º Que los hechos de la causa, tal como han quedado consignados en el razonamiento Quinto del fallo en alzada, constituyen los delitos de:

- a) Homicidio calificado de Hugo del Rosario Candía Núñez, previsto en el artículo 391 N° 1º del Código Penal, y,
- b) Aplicación de tormentos o de rigor innecesario de Máximo Neira Sala, previsto en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 150 del Código Penal.



Los que están sancionados a la fecha de los hechos de la presente causa, con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo y presidio o reclusión en sus grado máximo y suspensión en cualquiera de sus grados.

2º Que, al acusado **Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra**, le ha correspondido participación conforme a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal y, al acusado **Ary Antonio Acuña Figueroa**, como **autor mediato** conforme a lo previsto en el artículo 15 N° 2 del Código Penal, en el delito de homicidio calificado de Hugo del Rosario Candía Núñez. Y, a ambos **como autores directos** del delito aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N° 1 inciso segundo, del Código Penal, en perjuicio de Máximo Segundo Neira Salas.

3º.- Que, siendo más favorable para los referidos sentenciados dar aplicación en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, se ajustará a dicha norma la regulación de la entidad de la sanción a imponer.

Y al favorecer al sentenciado Acuña Figueroa una atenuante y no perjudicarle agravante, no será sancionado en su máximo en el delito de homicidio calificado y se fijara la sanción en diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, misma pena que se aplicó al autor directo Julio Alarcón Saavedra.

Asimismo, en el delito de aplicación de tormentos previsto en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 150 del Código Penal, concurriendo una atenuante respecto de ambos condenados y acorde a lo previsto en el artículo 67 del mismo cuerpo legal, dentro del grado de presidio menor en su grado máximo, se aplicara en su minimum y se fijara en tres años y un días de presidio menor en su grado máximo.



Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 16, 18, 68 y 150 del Código Penal, se decide que **se confirma la sentencia apelada** de ocho de agosto de dos mil dieciséis, escrita de fojas 2104 y siguientes, **con las siguientes declaraciones:**

I.- Que queda condenado **Ary Antonio Acuña Figueroa** a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado de de Hugo del Rosario Candía Núñez, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano.

II.- Que **Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra y Ary Antonio Acuña Figueroa**, quedan condenados a la pena de **tres años y un día de presidio menor en su grado máximo**, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N°1, inciso segundo, del Código Penal, en perjuicio de Máximo Segundo Neira Salas, ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano.

3.- No concurriendo en la especie los requisitos previstos en la Ley 18.216, la pena impuesta a Ary Acuña Figueroa, será de cumplimiento efectivo, sirviéndole de abono el tiempo de privación de libertad reconocido en la sentencia de base, esto es, desde el 26 de agosto al 2 de septiembre del año 2014.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.



Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Zepeda.

Rol N° 28.310-2018

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro Suplente Sr. Zepeda, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:02

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:03

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 21/09/2021 13:37:04

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 21/09/2021 14:24:49



En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

